

**ACUERDO: CG-IEEPCO-SNI-61/2013, RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE CONCEJALES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM, QUE ELECTORALMENTE SE RIGE POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS.**

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respecto de la elección de concejales municipales del Ayuntamiento de Nuevo Zoquiapam, que electoralmente se rige por Sistemas Normativos Internos, que se genera a partir de los siguientes:

**ANTECEDENTES**

**A. ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN**

- I. Acuerdo CG-IEEPCO-SNI-1/2012.** El 17 de noviembre de 2012 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobó el Catálogo General de los Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, entre ellos, al municipio que nos ocupa.
- II. Asamblea General Comunitaria.** El 24 de agosto de 2013 se realizó la Asamblea General Comunitaria, en la cual se integraron a los órganos comunitarios encargados del proceso:

**a) Mesa de Debates.** Se designó a los siguientes ciudadanos:

CARGO	MESA DE DEBATES
	NOMBRE
Presidente	Elías Bulmaro Cuevas López
Secretario	Lorenzo Fortino Hernández García
Primera Escrutadora	Teodora Hernández López
Segundo Escrutador	Sirenio León Beteta

**b) Consejo Municipal Electoral.** Se designó a los siguientes ciudadanos:

CARGO	CONSEJO MUNICIPAL
	NOMBRE
Presidente	Octaviano Martínez Beteta
Secretario	Joel Hernández Santiago
Primer vocal	Elena Cuevas Hernández
Segundo vocal	Zoila Alavés Hernández
Tercer vocal	Filemón Vázquez Hernández
Cuarto Vocal	Abraham Pérez Pablo

- III. Notificación.** El 26 de agosto siguiente se recibió oficio signado por el C. Juventino Raymundo López Pérez, Presidente Municipal Propietario, con el cual informó que el cabildo municipal, en reunión de fecha 25 de agosto de 2013, acordó celebrar la elección de concejales municipales el día 24 de noviembre de 2013.
- IV. Convocatoria.** El día 20 de septiembre de 2013 el Consejo Municipal Electoral de Nuevo Zoquiapam, Oaxaca, emitió la convocatoria para la elección de los Concejales Municipales relativa al ejercicio constitucional del periodo 2014-2016, a verificarse el día 29 de septiembre del año en curso.
- V. Juicio electoral.** El 24 de septiembre siguiente el ciudadano Juventino Raymundo López Pérez, en su calidad de Presidente Municipal Propietario, presentó escrito de impugnación en contra de la emisión de la convocatoria, de 20 de septiembre de 2013, elaborada por el Consejo Municipal Electoral.
- VI. Sentencia.** El 28 de septiembre siguiente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca dictó la sentencia recaída al expediente JNI/19/2013, relativo al juicio promovido por Juventino Raymundo López Pérez en contra de la convocatoria emitida por el Consejo Municipal Electoral, resolviendo lo siguiente:

(...)

**PRIMERO.** Este Tribunal es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con el CONSIDERANDO PRIMERO de este fallo.

**SEGUNDO.** Es improcedente el juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos promovido por Raymundo Juventino López Pérez, por los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente resolución.

**TERCERO.** Remítase a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el escrito de demanda y anexos, para que en el ámbito de sus facultades lleva a cabo la consulta en el municipio de Zoquiapan, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, de conformidad con el CONSIDERANDO SEGUNDO de esta sentencia.

(...)

## **B. JORNADA ELECTORAL Y SUS RESULTADOS**

- I. Computo municipal.** El día 29 de septiembre del 2013 el Consejo Municipal Electoral concluyó el computo de la elección, mismo que arrojó los siguientes resultados:

GRUPO	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Elías Bulmaro Cuevas López	153	Ciento cincuenta y tres
Joel Hernández Santiago	244	Doscientos cuarenta y cuatro
Sergio Dionisio Hernández García	111	Ciento once
Total	508	Quinientos ocho
Abstenciones	2	Dos

- II. Concejales electos.** Una vez concluido el computo municipal, resultaron electos los siguientes ciudadanos:

CARGO	CONCEJALES ELECTOS	
	TIPO	NOMBRE
Presidente Municipal	Propietario	Joel Hernández Santiago
	Suplente	Elías Bulmaro Cuevas López
Síndico Municipal	Propietario	Mario José Hernández Mendoza
	Suplente	Perfecto Beteta Hernández
Regidor de Hacienda	Propietario	Mario Tomas Hernández Cuevas
	Suplente	Elfego Gerardo Santiago Cuevas
Regidor de Educación	Propietario	Rafael Vázquez Alavés
	Suplente	Andrés García Chávez
Regidor de Salud	Propietario	Luis Hernández Hernández
	Suplente	Antonio León Alavés
Regidor de Obras	Propietario	Ángel León Alavés
	Suplente	Francisco Justo Bautista Beteta

## C. PROCESO DE CONCILIACION

- I. Reunión de conciliación.** El día 08 de octubre del mismo año, se celebró reunión de trabajo con los grupos en controversia, sin que se logaran los consensos necesarios para dar fin a la misma. Así mismo, determinaron continuar con los trabajos de la mesa de conciliación el día 29 de octubre siguiente.

**II. Continuación de la reunión.** El día 29 de octubre de de 2013, medularmente se arribo a las siguientes posiciones:

**PRIMERO:** *Los integrantes del Consejo Municipal Electoral, presidente municipal y regidores suplentes, solicitan que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, valide la asamblea de elección de las autoridades municipales, efectuada el día veintinueve de septiembre del presente año y manifiestan que ya no acudirán a otra reunión de trabajo que sean convocados por parte del instituto.*

**SEGUNDO:** *El presidente municipal y regidores propietarios, manifiestan que **no tienen inconveniente en reconocer a las autoridades electas, pero que se les permita terminar las obras pendientes y que no se les culpe a ellos si hay una reducción de presupuesto para el municipio en el próximo periodo.***

**III. Juicio ciudadano.** El 30 de Octubre de 2013 se recibió escrito de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano promovido por Juan Beteta Alavez, por el que se inconforma esencialmente por lo siguiente:

*“Los actos que reclamo son los siguientes: a) a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, la omisión de cumplir con el principio de legalidad así como el de certeza, así como la falta de medidas suficientes y razonables que permitan alcanzar soluciones a la problemática; b) Consejo Ciudadano Municipal de Nuevo Zoquiapam, Oaxaca, o Comité Electoral Municipal o Comité Ciudadano Electoral, la nulidad de la convocatoria expedida para la elección de Concejales Municipales, la celebración de dicha asamblea, así como los resultados de la misma, y c) al ciudadano Juventino Raymundo López Pérez, presidente Constitucional Municipal de Nuevo Zoquiapam, Oaxaca, le reclamo la omisión de expedir en tiempo y forma la Convocatoria para la elección de Concejales.”*

**IV. Sentencia.** El 20 de noviembre de 2013 el Tribunal Estatal Electoral de Poder Judicial de Oaxaca, determinó declarar la improcedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, promovido por Juan Beteta Alavez, relativo al expediente identificado con la clave JDC/256/2013.

Del mismo modo, ordenó reconducir la demanda al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que conozca, atienda y resuelva las manifestaciones planteadas por el quejoso.

**V. Cumplimiento.** El día 22 de noviembre siguiente en cumplimiento a la sentencia emitida por el tribunal local, se convocó a las partes, y entre ellos, al ciudadano Juan Beteta Alavez, a una reunión conciliatoria que fue programada para el 26 de noviembre de 2013.

**VI. Reunión conciliatoria.** El día 26 de noviembre del año en curso, se realizó una reunión conciliatoria, entre las partes en conflicto, en la que esencialmente se arribó al lo siguiente:

“ACUERDOS:

*PRIMERO: SOLICITAMOS AL CONSEJO GENERAL QUE A LA BREVEDAD POSIBLE CALIFIQUE LA ASAMBLEA ELECCION DE CONSEJALES AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM PARA EL TRIENIO 2014-2016.*

*SEGUNDO: MANIFESTAMOS QUE NO ASISTIREMOS A NINGUNA OTRA REUNION DE TRABAJO, QUE SE NOS CONVOQUE POR PARTE DE CUALQUIER AUTORIDAD ELECTORAL.”*

Por su parte, el ciudadano Juan Beteta Alavez no se presentó a la sesión de trabajo, a pesar de que fue debidamente notificado por conducto de Elvia Montesinos José, en el domicilio señalado en la sentencia.

Así mismo, en la reunión de conciliatoria el ciudadano Octaviano Martínez Beteta, Presidente del Consejo Municipal Electoral, sostuvo que la persona de nombre Juan Beteta Alavez, no existe en su padrón comunitario, dado que nunca ha cumplido con cargos en la comunidad. Por ende, solicitó a nombre de los asistentes presentes que se valide la elección de Concejales de Nuevo Zoquiapam, Oaxaca.

**VII. Fe Notarial.** El 29 de noviembre del mismo año, se recibió el instrumento notarial numero 34, 010 levantado por el Licenciado Rodolfo Morales Moreno, notario público número 19 del estado de Oaxaca. En el que medularmente se da fe que el día 24 de noviembre de 2013, no se realizó ninguna Asamblea General Comunitaria en Nuevo Zoquiapam, Oaxaca.

Dicho instrumento, fue presentado por el ciudadano Octaviano Martínez Beteta, Presidente del Consejo Municipal Electoral de Nuevo Zoquiapam, Oaxaca, con el objeto de hacer del conocimiento a este órgano administrativo electoral la no realización de alguna Asamblea General

Comunitaria. Cuestión que se encuentra vinculada a la notificación relativa a que el cabildo municipal, en reunión de fecha 25 de agosto de 2013, acordó celebrar la elección de concejales municipales el día 24 de noviembre de 2013.

#### **D. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTAMEN**

- I. Integración del expediente.** Una vez agotado el proceso de conciliación, el órgano responsable del desarrollo del proceso, integró el expediente y lo remitió a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos. Una vez recibido, se ordenó su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.
- II. Dictamen.** En su oportunidad, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos formuló el presente dictamen y lo presentó al Consejo General para los efectos conducentes, en los términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción XI, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

### **CONSIDERANDOS**

#### **PRIMERO. COMPETENCIA**

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción XLIV, y 14, fracción VII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con lo previsto por el artículo 114, apartado B, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca corresponde pronunciarse sobre la validez de las elecciones del Régimen de Sistemas Normativos y, en su caso, otorgar las constancias respectivas.

Lo anterior, en atención a que se trata de un municipio que elige a sus autoridades municipales en el marco lo previsto por los artículos 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vinculados con los tratados internacionales en materia de derechos y cultura indígena suscritos por el Estado mexicano.

#### **SEGUNDO. CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN**

A efecto de realizar la calificación de la elección de concejales municipales, debe tenerse presente el marco constitucional y legal conforme al cual han de verificarse los requisitos de tal elección:

#### **A. MARCO NORMATIVO**

En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, que: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del mismo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De lo anterior deriva, que al decidir cualquier cuestión concerniente a la integración de los poderes públicos, debe privilegiarse la voluntad del pueblo.

En el párrafo segundo del artículo 41 constitucional se establece, que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo con las bases que se indican en la propia Constitución.

En resumen, los principios constitucionales que deben observarse en comicios democráticos para la renovación de, entre otras, las autoridades municipales son: elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad; organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

En cuanto al tema de derechos humanos, el artículo 1º constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.

En adición, la Constitución impone que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

En lo conducente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2° apartado A, fracción VII, establece que la Nación Mexicana es única e indivisible. La cual tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En este orden de ideas, la Constitución define que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Además, que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Se subraya, que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Dentro de esta relación, la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
- Entre otras.

Bajo estas premisas, se determina que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en las legislaciones de las entidades federativas, con el propósito de fortalecer la



participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

En congruencia con lo antes expuesto, los artículos 25, 27, 29, 31 y 67, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, fundamentalmente, se encargan de desarrollar para el ámbito local, las disposiciones necesarias para configurar un gobierno republicano, representativo y popular, el cual, según expresa el numeral 29, tiene como base de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El artículo 16 de la Constitución local, proclama la composición étnica plural del Estado de Oaxaca, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran, mencionando expresamente los Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques.

En esencia, la Constitución Local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la libre determinación expresada como autonomía, gozando incluso de personalidad jurídica de derecho público; así como derechos sociales, tales como: sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, jurisdicción sobre sus territorios, acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, participación en el quehacer educativo y en los planes de desarrollo, formas de expresión religiosa y artística, acervo cultural y, en general, los mecanismos de protección para todos los elementos que configuran su identidad.

Para asegurar tales prerrogativas, impone al legislativo local establecer en la ley reglamentaria las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, con el objeto de que sean ejercidas directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes legalmente los representen, entre otras, las formas de organización social, política y de gobierno, y los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas.

Por su parte, los artículos 114, primer párrafo, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1º, párrafo 1, Fracciones II y III, 4, numeral 1 y 2, 14, párrafo 1, fracciones I, II y VII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, instituyen que el Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones que cuenta con atribuciones, entre otras, coadyuvar en la preparación y desarrollo de las elecciones del régimen de Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, así como resolver las controversias que se presenten, emitir la declaratoria de validez y, en su caso, el otorgar las constancias respectivas.

A su vez, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales es el cuerpo legal encargado de regular, entre otras cuestiones, lo relativo a los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía y la función estatal de organizar y vigilar las elecciones de los integrantes de los ayuntamientos.

En el Libro Sexto, el Código regula la renovación periódica de las autoridades municipales, que electoralmente se realizan mediante Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas.

En su artículo 255, establece las bases conceptuales de este tipo de procesos electorales, aplicables en todos los municipios con Sistemas Normativos Internos, en los siguientes términos:

*“Artículo 255*

*1. Las disposiciones de este libro serán aplicables en todos aquellos municipios, que en el ejercicio de su derecho a libre determinación expresada en su autonomía, electoralmente se rigen por sus propios sistemas normativos internos.*

*2. Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Soberanía del Estado.*

*3. Las disposiciones contenidas en el presente Libro, son reglamentarias de los artículos 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, y tienen como objeto respetar, vigilar y sancionar los procedimientos electorales de los municipios y comunidades indígenas.*

4. En este Código se entiende por sistemas normativos internos, los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal.

5. El procedimiento electoral en el régimen de sistemas normativos internos, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. **Estos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y el levantamiento de las actas correspondientes.**

6. El Instituto será garante de los derechos tutelados por los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, y 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, para salvaguardar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresada en sus sistemas normativos internos y la autonomía para elegir a sus autoridades o gobiernos locales; así como en el reconocimiento a la diversidad de culturas y sistemas normativos existentes en el Estado.

7. Las normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizarán que las mujeres disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas.”

A partir de ello, en congruencia con los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, en su artículo 257, párrafo 1, fracciones I, II, y III, se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos indígenas, entre otras, el de actuar de conformidad con las disposiciones que rijan la vida interna de sus municipios, el de participar en la permanente renovación y actualización de sus sistemas, así como cumplir con los cargos, servicios y contribuciones que la Asamblea les confiera.

Por lo que respecta a los requisitos de elegibilidad, los ciudadanos deben contar con las cualidades indicadas por el artículo 258 del Código, para estar en aptitud de resultar electos.

En cuanto a los actos previos a la elección a los que deben ajustarse los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus autoridades municipales, se establecen en los artículos 259 y 260 del Código.

En este orden de factores, en el artículo 261 del Código se disponen las reglas relativas a los actos correspondientes a la jornada electoral.

Se distingue en la norma, una prohibición expresa de intervención en dichos comicios dirigida hacia los partidos políticos, en su artículo 262.

En razón de lo anterior, previamente debe desplegarse una revisión respecto del cumplimiento de los requisitos que nos indica el artículo 263, de la normatividad multicitada.

Desde luego, que la satisfacción de los elementos fundamentales señalados con anterioridad permite considerar a una elección como producto del ejercicio popular de la soberanía, realizada dentro del sistema jurídico-político construido en las constituciones federal y local, así como de los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas y las demás disposiciones particulares de la elección.

Bajo esas premisas, puede decirse que este Consejo General estaría en condiciones de emitir la declaración de validez de la elección y, en su caso, expedir las constancias respectivas.

## **B. CONTROVERSIAS**

### **1. Mediación como sistema alternativo para la solución de conflictos**

El artículo 266, párrafo 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, concibe la mediación electoral como un medio alternativo para solucionar los conflictos, a través del cual las partes resuelven directamente una controversia con la intervención o colaboración del instituto.

Conforme la disposición jurídica anotada, debe decirse que esta alternativa de resolución de los conflictos electorales, está basada en los criterios de la

democracia, la pacificación social, la tolerancia, el **diálogo**, el respeto y el **consenso**.

Ahora bien, de forma categórica el artículo 266, párrafo 1, del mismo ordenamiento nos indica que la mediación tiene por objeto *“construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos”*.

En el caso que nos ocupa, debe diferenciarse cuando la conciliación se encuentra establecida como etapa del proceso judicial o anterior al mismo; de aquellos sistemas, como el nuestro, que la reglamentan como una mera facultad del órgano administrativo electoral.

Esas diferencias surgen cuando la conciliación se impone como etapa previa a la introducción al proceso judicial, cuya naturaleza preventiva tiende a convertirse en un proceso autónomo cuando logra alcanzar el objetivo de avenencia.

En cuyo caso, la conciliación sería obtenida desde la especialidad de su objeto, es decir, que no interesa el objeto material que discute la litis sino el acuerdo logrado desde el acto de avenencia. Es así, que cualquier forma convenida entre las partes responde a decisiones propias de quienes las asumen.

De este modo sería posible confirmar que existe un proceso de conciliación independiente porque tiene partes, tiene un órgano que intermedia y pacifica (verbi gratia juez de paz) y consigue un resultado útil y efectivo al interés de los comparecientes.

Esta condición demuestra que cuando se habla de conciliación no se piensa en el sentido estricto del término, sino en un sentido más amplio que tolera la declinación de los intereses, el sometimiento absoluto y la misma transacción o renuncia recíproca a posiciones procedentes irreductibles.

No obstante, debe traerse a colación que el artículo 264 del Código establece dos hipótesis para instaurar un proceso de mediación, a saber:

**a)** La primera de ellas, en los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e integración de los órganos de gobierno, en cuyo caso, según lo dispuesto por párrafo 2 de la norma antes invocada.

Ahora bien, si tomamos en cuenta el principio Constitucional de la definitividad de las etapas, en la hipótesis analizada quedarían fuera las

controversias que se plantean con respecto de las reglas aprobadas, es decir, aquellas precisamente con las que se desarrolló los comicios.

Se sostiene lo anterior, a partir de que se destacan en la norma los vocablos *“renovación e integración”* de los órganos de gobierno, cuestión que se materializa precisamente con la realización de los comicios -jornada electoral- y la calificación de la elección.

En ese sentido, en los casos de controversias que surjan desde la realización de los comicios y hasta antes de emitir el acuerdo de calificación de la elección, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos podría solicitar la opinión de instituciones públicas calificadas para emitir criterios respecto de los Sistemas Normativos Internos, según lo indica el párrafo primero del artículo 265.

Ahora bien, previamente a cualquier resolución se establece el imperativo de buscar la conciliación entre las partes, lo que entonces, nos conduce a la instauración de un proceso de mediación con el objeto de construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos; y con base en ellos, tomar por consenso entre las partes alguna de las variables de solución previstas en los párrafos del dispositivo 265 del Código invocado.

Sin embargo, es evidente que las variables de solución se encuentran inmersas en el proceso alternativo de resolución de conflictos, pues tales disposiciones corresponden al “CAPÍTULO QUINTO” denominado “De la Mediación y de los Procedimientos para la Resolución de Conflictos Electorales”; en consecuencia, solo pueden ser determinadas con la avenencia de las partes en conflicto.

En la hipótesis analizada, debe decirse que cuando se trata de irregularidades planteadas contra el resultado de la elección, así como la pretensión de nulidad de los comicios, este órgano administrativo electoral no cuenta con atribuciones para analizar dichas irregularidades, como se demostrará más adelante.

**b)** La segunda hipótesis, se refiere a cuando se manifieste alguna inconformidad con las reglas del sistema normativo interno, en base a lo previsto por el párrafo 3, del dispositivo legal mencionado.

Es decir, la legislación obliga a este órgano a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme sus Sistemas Normativos Internos, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance, como es la consulta con los ciudadanos que residen en el municipio.

Así las cosas, el órgano administrativo electoral debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios, esto es con el objeto de conciliar las diversas posiciones respecto a las reglas del proceso electoral. Cuestión que debe entenderse como previa a la celebración de la jornada electoral.

Al respecto, existe un criterio regulador en la Jurisprudencia 15/2008, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señalan:

*Joel Cruz Chávez y otros*

VS

*Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras*

*Jurisprudencia 15/2008*

**COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).**- De los artículos 2, apartado A, fracciones III y VII y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 58 y 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, se desprende que las autoridades electorales están obligadas a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme al sistema de usos y costumbres, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance, como es la consulta con los ciudadanos que residen en el municipio. La autoridad electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios.

*4ta Época:*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: Quincuagésima*

*Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.*  
*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2542/2007.—Actores: Moisés Ramírez Santiago y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.*

*Notas: El contenido de los artículos 58 y 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el cual se interpreta en esta jurisprudencia actualmente corresponde con los diversos 79 y 143 respectivamente, del código vigente. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.*

*Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 16 y 17.*

## **2. Estudio de la controversia**

Las peticiones planteadas por ciudadano Presidente Municipal y regidores propietarios de Nuevo Zoquiapam; así como por el ciudadano Juan Beteta Alavez, resultan inatendibles, por los motivos y razones que a continuación se indican:

### **a) Precisión de la controversia:**

La causa de pedir del ciudadano Presidente Municipal y regidores propietarios, se circunscribe esencialmente a solicitar que se les permita realizar actos propios del ejercicio de gobierno, que sólo hacen patente las diferencias que prevalecen en la vida interna de la comunidad.

Dicho planteamiento quedo registrado en los acuerdos de la minuta de fecha 29 de octubre de de 2013, en los términos siguientes:

**“SEGUNDO:** *El presidente municipal y regidores propietarios, manifiestan que **no tienen inconveniente en reconocer a las autoridades electas, pero que se les permita terminar***



***las obras pendientes y que no se les culpe a ellos si hay una reducción de presupuesto para el municipio en el próximo periodo.”***

Si bien tales actos, se encuentran vinculados al ejercicio de gobierno, no menos cierto es, que han contribuido con las diferencias prevalecientes en el ámbito electoral.

Por su parte, el ciudadano Juan Beteta Alavez, se circunscribe a reclamar los siguientes actos:

*“...a) a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, la omisión de cumplir con el principio de legalidad así como el de certeza, así como la falta de medidas suficientes y razonables que permitan alcanzar soluciones a la problemática; b) Consejo Ciudadano Municipal de Nuevo Zoquiapam, Oaxaca, o Comité Electoral Municipal o Comité Ciudadano Electoral, la nulidad de la convocatoria expedida para la elección de Concejales Municipales, la celebración de dicha asamblea, así como los resultados de la misma, y c) al ciudadano Juventino Raymundo López Pérez, presidente Constitucional Municipal de Nuevo Zoquiapam, Oaxaca, le reclamo la omisión de expedir en tiempo y forma la Convocatoria para la elección de Concejales.”*

Es así que la causa de pedir se circunscribe a la pretensión de que se declare la nulidad de la elección y, en consecuencia, a la reposición de todo el proceso electoral, incluso desde la emisión de la propia convocatoria.

#### **b) Atribuciones del Instituto:**

En cuanto a las atribuciones del instituto para la resolución de las controversias en este tipo de procesos, el artículos 264, párrafos 1 y 2 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, el Consejo General debe conocer las controversias respecto de la renovación e integración de las autoridades que se eligen mediante los sistemas normativos internos de los pueblos y las comunidades indígenas.

Este precepto otorga atribuciones al Consejo General para atender las controversias que se presenten mediante la implementación de un proceso de mediación electoral en el que se busque la conciliación entre las partes, en los casos anteriormente abordados.

Sin embargo, resulta importante enfatizar, que en términos de lo previsto por el artículo 41, fracciones VI, VII, VIII y IX, la implementación de las tareas que

se derivan de dicho método alternativo de solución, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos.

De la misma manera, no debe perderse de vista que lo previsto por el artículo 26, fracción XLIV, del Código establece atribuciones para emitir un acto declarativo, sobre la validez o no de un proceso electoral del tipo que nos ocupa, el cual se encuentra vinculado con el cumplimiento de los requisitos formales y constitucionales de una elección desarrollada en el marco de la auto determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

### **c) Atribuciones del Tribunal:**

Sin embargo, en la especie debe tomarse en cuenta lo previsto por artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual dispone que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca es el Tribunal Estatal Electoral.

Entre las atribuciones que se le confieren al órgano jurisdiccional, se encuentran la de conocer los recursos y medios de impugnación respecto de la elecciones que se realizan mediante usos y costumbres, y las demás controversias que determine la ley respectiva; además de la declaración de nulidad de una elección, por las causas expresamente establecidas en la Ley:

*“De los Tribunales Especializados*

*(Reformado mediante decreto No. 397, publicado el 15 de abril de 2011)*

**Artículo 111.-** *El Poder Judicial contará con Tribunales Especializados, de carácter permanente, autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones, los cuales contarán con las siguientes características y atribuciones:*

*I.- Sus resoluciones en el ámbito de su competencia serán definitivas e inatacables en el orden local;*

*II.- ...”*

*Los Tribunales a los que se refiere el primer párrafo de este artículo son los siguientes:*

*A. El Tribunal Estatal Electoral, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca, y tendrá las siguientes atribuciones:*

*I.- Conocer de los recursos y medios de impugnación que se interpongan respecto de las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados y Concejales de los Ayuntamientos por los regímenes de partidos políticos y **de usos y costumbres**, de la revocación de mandato del*

Gobernador del Estado, **así como de todas las demás controversias que determine la ley respectiva;**

II.- ...

III.- ...

IV.- *El Tribunal Estatal Electoral podrá decretar la nulidad de una elección por causas expresamente establecidas en la ley. Se preverán los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias de impugnación, tomando en cuenta el principio de definitividad de los procesos electorales;*

V. ...

VI.(sic) *Las demás atribuciones que le confieran esta Constitución y la Ley.*

En tanto que adicionalmente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, en su Libro Tercero denominado *“De los Medios de Impugnación y las Nulidades en las Elecciones de municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos”*, entre otras, establece las siguientes:

**“Artículo 80.**

*Los medios de impugnación regulados en este libro tienen por objeto garantizar:*

- a) La Legalidad de los actos de las autoridades electorales, que resulten vinculatorios con la preparación o desarrollo de los procesos electorales; a fin de salvaguardar el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas democráticas de gobierno, su identidad, cultura, cosmovisión, protección de sus prácticas políticas tradicionales y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural y sus instituciones político-electorales.*
- b) Que los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se sujeten invariablemente a las normas, principios, instituciones, procedimientos y prácticas electorales de los pueblos y las comunidades indígenas; y*
- c) La definitividad de los distintos actos y etapas del procedimiento electoral dentro del Sistema Normativo Interno.*

**Artículo 81.**

*El sistema de medios de impugnación en los Municipios que electoralmente se rigen por los Sistemas Normativos Internos, se integra por:*

- a) Juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos(sic)*
- b) Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano dentro del régimen de los Sistemas Normativos Internos.”*

**“Artículo 84.**

*1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en este Libro, serán ofrecidas, admitidas y valoradas las pruebas que establece esta Ley, preservando los principios institucionales y los procedimientos electorales que se han puesto en práctica durante los tres últimos procesos electorales o los acuerdos adoptados por la asamblea general comunitaria u otros órganos legitimados por las comunidades.*

*2. En los casos correspondientes deberán privilegiarse los acuerdos o pactos tomados por la colectividad a través de la asamblea o de otras instancias u órganos legitimados por la comunidad, respetando los principios que dan cohesión interna e identidad cultural al pueblo indígena de que se trate.*

*3. En los casos en que se encuentren en conflicto derechos colectivos plenamente justificados por la comunidad en contra de derechos o prerrogativas individuales, deberá resolverse armonizando o preservando los colectivos.*

*4. Si durante la tramitación del juicio ante el Tribunal, una de las partes solicita iniciar o continuar un proceso conciliatorio, el Tribunal dará vista a la contraparte y, en caso de existir conformidad y siempre que los plazos procesales lo permitan, decretará la suspensión del procedimiento por única ocasión y por un plazo no mayor a quince días, para dar lugar a la conciliación. En caso de que las partes logren un acuerdo para dirimir la controversia, el Tribunal calificará dicho acuerdo y en su caso lo elevará a calidad de sentencia con autoridad de cosa juzgada. La conciliación a que se refiere este apartado se entenderá como derecho permanente de las partes hasta antes de dictar sentencia.*

**Artículo 85.**

*El Tribunal recabará de oficio y ordenará el desahogo de los medios de prueba que estime necesarios para resolver la controversia planteada.”*

**“Artículo 88.**

*Para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales y la salvaguarda de las normas, principios, instituciones, procedimientos y prácticas electorales de los pueblos y las*

*comunidades indígenas, en los términos señalados en este Libro, podrá interponerse el Juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos.*

**Artículo 89.**

*El Juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos, procede contra:*

- a) Los actos o resoluciones del Consejo General, que causen un perjuicio al promovente que tenga interés jurídico;*
- b) Los actos o resoluciones que se realicen desde la preparación de la elección hasta antes de la instalación de la Asamblea General Comunitaria;*
- c) Los resultados, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría;*
- d) La nulidad de la votación o la nulidad de la elección;*
- e) Las determinaciones sobre el otorgamiento de las Constancias de Mayoría; y*
- f) Los resultados consignados en las actas de la Asamblea General Comunitaria de elección de concejales a los ayuntamientos agentes municipales y de policía, así como de representantes de rancherías, núcleos rurales, barrios y colonias, por error grave o por error aritmético.”*

**“Artículo 91.**

*El Tribunal es competente para conocer y resolver el Juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos.”*

**“Artículo 94.**

*Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la votación emitida en la elección de concejales a los ayuntamientos, agentes municipales y de policía, así como de representantes de rancherías, núcleos rurales, barrios y colonias y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada.*

**Artículo 95.**

*Las elecciones cuyos resultados, constancias de validez y mayoría que no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.*

**Artículo 96.**

*Preservando las normas, principios, instituciones, procedimientos y prácticas tradicionales de elección de las autoridades municipales, de los pueblos y comunidades indígenas a que se*

*refiere el artículo 79 de esta ley, podrá declararse la nulidad de la votación recibida o la nulidad de una elección cuando haya quedado plenamente probado y sean determinantes para el resultado de la elección, irregularidades graves, no reparables en la elección que violen en forma alguna los principios de legalidad, libertad, certeza, imparcialidad, autenticidad y universalidad en la emisión de voto.*

**Artículo 97.**

*También será nula una elección cuando todos los integrantes de la planilla de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.”*

**d) Conclusiones:**

De estas atribuciones, se pueden distinguir dos ámbitos de actuación, a saber:

- 1)** La del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de orden administrativo-electoral para resolución de controversias mediante la implementación de la mediación y la avenencia de las partes, así como la calificación de las elecciones correspondientes al régimen de Sistemas normativos internos de los Pueblos y comunidades indígenas, y
- 2)** La del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de carácter puramente jurisdiccional.

La función jurisdiccional del Tribunal Electoral se desarrolla mediante la resolución, en forma definitiva, de los medios de impugnación de carácter contencioso, previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, los cuales tienen como finalidad garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.

Lo que constituye en esencia, el sistema integral de justicia en materia electoral dentro del cual se prevén los mecanismos para que los actos y resoluciones de los órganos electorales se ajusten al principio de legalidad.

Cuestión que se logra mediante la interposición de medios de impugnación previstos por la ley, la instauración de las fases y procedimientos del proceso judicial, así como la emisión de una sentencia. Elementos que materializan

con la reparación del daño o afectación a la esfera jurídica de algún ciudadano integrante de los pueblos y comunidades indígenas.

En consonancia con lo anterior, en el artículo 84, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone, reglas concretas respecto al ofrecimiento, admisión y valoración de las pruebas para la resolución de los medios de impugnación previstos en su Libro Tercero.

Así como, en su caso, recabar de oficio y ordenar el desahogo de los medios de pruebas que estime necesarios para resolver las inconformidades que le sean planteadas.

En cambio, en el procedimiento alternativo para la resolución de conflictos que se impone desarrollar al Consejo General cuando existan controversias, no se rige por Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino por las disposiciones previstas en los artículos 264, 265 y 266 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

Lo que impide que este órgano administrativo electoral admita las pruebas ofrecidas, ordene su desahogo y efectué las valoraciones correspondientes, en el marco de un proceso jurisdiccional conforme la normatividad antes apuntada, y cuya naturaleza misma del asunto cuestionado, resulta competencia exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

En efecto, toda actuación autoritaria, sin excepción, debe de encontrarse fundamentada en un precepto jurídico que directa e innegablemente la regule, pues si no existe este sustento legal, el proceder de la autoridad será contrario a derecho, toda vez que se estará en presencia de un órgano incompetente, lo que equivale a decir que el ente de autoridad de que se trate se encuentra desprovisto de la potestad de proceder en el sentido en que lo hace.

Adicionalmente a lo antes planteado, es conveniente aclarar que sólo podrá ejercer una carga competencial específica un órgano de autoridad que encuentre su existencia jurídica en un ordenamiento legal, es decir, las autoridades no existen *-per se-*, sino que se hace necesario que se encuentren reguladas por el orden jurídico que les resulte aplicable al caso concreto.

De estimar lo contrario, a juicio de este órgano administrativo se estaría ante la presencia de una violación a los principios legalidad y de seguridad jurídica, a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En adición a lo anterior, el artículo 255, párrafo 5, del Código de la materia prevé que el procedimiento electoral que nos ocupa, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales.

Sobre esta situación dispone, que esos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y hasta el levantamiento de las actas correspondientes.

En ese sentido, el proceso electoral concluyó con el levantamiento de las actas respectivas elaboradas por la Mesa de los Debates, al finiquitar los trabajos vinculados a la jornada electoral, sus resultados y la remisión del expediente, dentro del plazo previsto por el artículo 261, párrafo 3, del Código.

En consecuencia, al haber concluido el proceso de conciliación intentado por el órgano electoral, sin que se alcanzarán los acuerdos necesarios para la resolución alternativa de la controversia. Con base en el principio Constitucional de la definitividad de las etapas, debe decirse que en lo solicitado por el grupo encabezado por el cabildo de Nuevo Zoquiapam y el ciudadano inconforme, subyacen diversos elementos sustantivos que están íntimamente vinculados a los medios de impugnación y a las hipótesis normativas previstas por los artículos 4, párrafos 1, 2, incisos a) y b), y 3, inciso e), 70, párrafo 1, incisos a) y b), 84, párrafo 1, 85, párrafo 1, incisos a) y b), 87, párrafo 1, 88, párrafo 1, inciso b), 91, párrafo 1, 93, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

En tal sentido, por disposición del sistema jurídico antes descrito, este órgano administrativo concluye que no ha lugar a determinar las pretensiones solicitadas por el grupo inconforme con el resultado de la elección, en virtud de que carece de jurisdicción y competencia para acceder a lo solicitado.



En adición a lo anterior, además se advierte que en el caso se debe garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas “el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, en base a los criterios de jurisprudencia cuyo rubro y texto mencionan:

*Herminio Quiñónez Osorio y otro*

VS

*LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida  
en Colegio Electoral y otro*

*Jurisprudencia 7/2013*

**PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL.-** De la interpretación sistemática de los artículos 4, párrafo primero y 17, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se debe garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas “el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, que los tribunales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como el que se garantice la independencia judicial y la plena ejecución de sus resoluciones, lo que obliga a tener un mayor cuidado en la aplicación de las causas de improcedencia que se prevén expresamente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las que derivan de la normatividad aplicable en la materia. En ese tenor, una intelección cabal del enunciado constitucional “efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, debe entenderse como el derecho de los ciudadanos que conforman las respectivas comunidades indígenas a lo siguiente: a) La obtención de una sentencia de los órganos jurisdiccionales del Estado; b) La real resolución del problema planteado; c) La motivación y fundamentación de dicha decisión jurisdiccional y, d) La ejecución de la sentencia judicial. Esta última conclusión se apunta porque los integrantes de dichas comunidades deben tener un acceso real a la jurisdicción del Estado, no virtual, formal o teórica, por lo que se debe dispensar una justicia en la que se puedan defender sin que se interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescindiera de sus particulares circunstancias, ya que la efectividad de la administración de justicia electoral debe traducirse en un actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una resolución o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios, para que, en forma completa y real, el órgano jurisdiccional decida materialmente o en el fondo el problema planteado.

5ta Época:

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y otro.—10 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-9167/2011.—Actores: Rosalva Durán Campos y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.—2 de noviembre de 2011.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1640/2012.—Actor: Andrés Nicolás Martínez.—Autoridades responsables: Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y otras.—30 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada.*

*Notas: El contenido del primer párrafo del artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se interpreta en la presente tesis, corresponde con el 2.º, Apartado A, fracción VIII, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.*

*La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de junio de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.*

*Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 19, 20 y 21.*

*Joel Cruz Chávez y otros*

*VS*

*Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras*

*Jurisprudencia 13/2008*

**COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.**-La interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A, fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar

la Discriminación; 2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conduce a sostener que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con los postulados constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades y sus integrantes. Lo anterior, porque el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceso a los tribunales. Esto es así, porque el alcance de la suplencia de la queja obedece al espíritu garantista y antiformalista, tendente a superar las desventajas procesales en que se encuentran, por sus circunstancias culturales, económicas o sociales.

#### 4ta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2569/2007.—Actores: Epifania Quiroga Palacios y otros.—Autoridades responsables: Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Genaro Escobar Ambriz. La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

*Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 17 y 18.*

*Herminio Quiñónez Osorio y otro*

VS

*LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra*

*Jurisprudencia 28/2011*

**COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.-**

*De la interpretación funcional del artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza a las comunidades indígenas el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, se deriva el deber de establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman, considerando sus particulares condiciones de desigualdad y facilitándoles el acceso efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco estado de indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o desproporcionadas, de acuerdo con su circunstancia de desventaja social y económica ampliamente reconocida en la Constitución y por el legislador en diversos ordenamientos legales. Por tanto, dado su carácter tutelar, debe considerarse que los medios de impugnación por los cuales se protegen los derechos político-electorales del ciudadano, se rigen por formalidades especiales para su adecuada protección, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas procesales, deben interpretarse de la forma que resulte más favorable a las comunidades indígenas.*

*5ta Época:*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y otro.—Autoridades responsables: LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.—10 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2542/2007.—Actores: Moisés Ramírez Santiago y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza. Notas: En el primero de los precedentes se invocó el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente se encuentra en la fracción VIII, del apartado A, del artículo 2°, de la Constitución, según la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de agosto de 2001. La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de noviembre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 19 y 20.*

Por lo tanto, solo puede garantizarse el acceso a la justicia, mediante la instauración de un proceso judicial en el que se cumplan escrupulosamente las formalidades esenciales del mismo.

Las cuestiones antes expuestas resultan relevantes en la especie, dado que conllevan peticiones formuladas como irregularidades de la jornada electoral, en las que la pretensión es la declaración de nulidad de la elección que nos ocupa, entonces debe decirse, que este tipo de determinaciones son una competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado.

Así las cosas, es de concluirse que no ha lugar a atender la pretensión de declarar la nulidad de la elección y, por consecuencia, convocar a una extraordinaria.

Misma suerte, ocurre con la pretensión de incidir, desde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en la realización de obras o actos propios del ejercicio de gobierno municipal, dado que la naturaleza de estas decisiones, no corresponden a los fines, obligaciones y atribuciones de este órgano. Máxime si en la especie no confluye la avenencia de las partes.

### **C. DE LOS REQUISITOS PARA EMITIR LA DECLARACION DE VALIDEZ**

Sobre las bases antes precisadas, este Consejo General procede al análisis del desarrollo del proceso electoral, conforme con las etapas y actos que lo integran, incluso de aquellos que aunque formalmente no se efectuaron en él, tienen una vinculación directa con el mismo:

- I. El apego a las normas establecidas por la comunidad o los acuerdos previos.** En términos de lo indicado por el artículo 263, párrafo 1, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, debe ponderarse primeramente que la elección se haya apegado a las normas establecidas por la comunidad y, en su caso, a los acuerdos previos.

Bajo esa premisa, del estudio integral del expediente no se advierte incumplimiento alguno a las reglas de la elección establecidas por la comunidad, mismas que se materializaron en la convocatoria particular de la elección y demás documentales que obran en el expediente, entre ellas, resultan de singular importancia el instrumento numero 33692 de la Notaria Publica número 19 del estado de Oaxaca, a cargo del Licenciado Rodolfo Morales Moreno, relativa a los actos que fueron desplegados por la comunidad, en pleno ejercicio de su derecho a la autodeterminación para designar a sus autoridades que consagran los artículos 2 de la Constitución federal y 16 de la Constitución local, y demás instrumentos internacionales de la materia.

- II. Que la autoridad electa haya obtenido la mayoría de votos.** Por su parte, el artículo 263, párrafo 1, fracción II, del Código citado, impone el imperativo al Consejo General de revisar que los concejales electos hayan obtenido la mayoría de votos.

En concordancia, debe decirse que ha quedado señalado en los antecedentes del presente instrumento el número de votos emitidos a favor de los candidatos contendientes, y a simple vista puede observarse que la autoridad electa obtuvo la mayoría de votos el día de la jornada electoral, cuestión que puede corroborarse con las documentales que contienen el computo de la elección que se encuentran agregadas al expediente.

- III. La debida integración del expediente.** Por último, el artículo 263, párrafo 1, fracción III, del Código, determina el deber al Consejo General de revisar la debida integración del expediente.

De acuerdo con las documentales que obran en el expediente, a juicio de este Consejo General se encuentra debidamente integrado en la elección que nos ocupa, dado que en él se encuentran, entre otros, la

convocatoria de la elección, que materializa las reglas particulares de la misma, las minutas levantadas con sus acuerdos alcanzados, y las respectivas actas en las que se asentaron los actos previos, la jornada electoral y los resultados de la elección.

**IV. De los derechos fundamentales.** De igual forma, este Consejo General no advierte de forma evidente la violación a algún derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, como son el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias de los pueblos y comunidades indígenas; así como el derecho de auto determinación en la designación de sus autoridades comunitarias, entre otros.

De la misma manera, no se advierte la existencia de alguna determinación contraria o incompatible con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni violación alguna a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, mismos que quedaron señalados con anterioridad.

Se sostiene lo anterior, no obstante el escrito formulado por el ciudadano inconforme y las controversias que se generaron respecto a la emisión de la convocatoria.

Es así lo anterior, dado que en ambos casos se buscaron alternativas de solución sin alcanzar la avenencia de las partes, para encontrar alguna salida alternativa a las diferencias.

En efecto, a la luz de los elementos sustanciales que nos aporta el instrumento notarial (33,692) treinta y tres mil seiscientos noventa y dos, por el cual el Licenciado Rodolfo Morales Moreno, notario público número 19 del Estado de Oaxaca, da fe en relación con diversos actos desplegados por la Asamblea General Comunitaria, en su calidad de máximo órgano de resolución de la comunidad, para la designación de sus autoridades municipales, de ellos, es de resaltarse los siguientes:

*... Siendo las (07:00) siete horas del día (29/09/2013) veintinueve de Septiembre del año 2013, procedo a trasladarme al Municipio de Nuevo Zoquiapam, Ixtaln de Juárez, Estado de Oaxaca, México, y siendo las (9:30) nueve horas con treinta minutos, me constituyo en el Palacio Municipal del Municipio antes mencionado, y bien cerciorado de encontrarme en dicho lugar en razón de que le pregunto a una persona del sexo masculino quien manifestó llamarse Atilano Eliseo Santiago Cuevas, síndico Municipal,*

y de que dicho lugar se trata del Palacio Municipal a lo cual me responde afirmativamente, así como porque a mi llegada ya me estaban esperando los integrantes del Consejo Municipal. Acto seguido procedo a dirigirme en compañía de los solicitantes a la mesa que se tiene instalada para el desarrollo de la Convención Municipal, y **una vez que procedo a instalarme, certifico que se hace perifoneo, en el cual se hace un último llamado a la población, para que se presente en la cancha municipal, para poder dar comienzo con la asamblea.** Acto seguido, y una vez que han transcurrido unos cuantos minutos de espera, **certifico que siendo las (10:00) diez horas da comienzo la asamblea.**,. Acto seguido y siéndolas (10:20) diez horas con veinte minutos, **se inicia la lectura de la Convocatoria, por parte del secretario del Consejo Municipal, C. JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO. La cual el suscrito transcribe textualmente: CONVOCATORIA: En base a los acuerdos tomados...**

**Una vez que se termina de dar lectura a dicha convocatoria, toma la palabra el C. OCTAVIANO MARTINEZ BETETA, Presidente del Consejo Municipal Electoral, quien manifiesta a los asambleístas si están de acuerdo con los puntos descritos en la convocatoria, así como con el orden del día del mismo, la cual se somete a votación a mano alzada y con lo cual el suscrito hace el conteo quedando los resultados de la siguiente manera: 493 votos a favor, y 17 abstenciones, con lo cual, certifico, se aprueba el orden del día.**

Ahora bien, como puede observarse, la convocatoria propuesta por el Comité Municipal Electoral, órgano a quien la comunidad le delegó la tarea en la asamblea de fecha 24 de agosto del año en curso, resulto aprobada. Lo que genera la convicción a este órgano administrativo electoral, que su emisión se ajusto a las reglas y órganos internos dados por la propia autoridad y con base en su derecho a establecerlas, en términos de la legislación nacional e internacional en materia de derechos y cultura indígena, antes invocada.

- V. Requisitos de elegibilidad.** Los ciudadanos electos satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca; y 258, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, así como los previstos en los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas participantes.



Lo antes expuesto, permite a este Consejo General concluir que ha lugar a emitir la declaratoria de la validez de la elección que nos ocupa y ordenar la emisión de las constancias respectivas.

Ante tales circunstancias, con fundamento en las consideraciones precedentes, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emite el siguiente:

## ACUERDO

**PRIMERO.** Se declara válida la elección de concejales municipales del Ayuntamiento de Nuevo Zoquiapam, Oaxaca.

**SEGUNDO.** Expídase la constancia respectiva a los ciudadanos electos como concejales municipales, en los términos que a continuación se indican:

CARGO	CONCEJALES ELECTOS	
	TIPO	NOMBRE
Presidente Municipal	Propietario	Joel Hernández Santiago
	Suplente	Elías Bulmaro Cuevas López
Síndico Municipal	Propietario	Mario José Hernández Mendoza
	Suplente	Perfecto Beteta Hernández
Regidor de Hacienda	Propietario	Mario Tomas Hernández Cuevas
	Suplente	Elfego Gerardo Santiago Cuevas
Regidor de Educación	Propietario	Rafael Vázquez Alavés
	Suplente	Andrés García Chávez
Regidor de Salud	Propietario	Luis Hernández Hernández
	Suplente	Antonio León Alavés
Regidor de Obras	Propietario	Ángel León Alavés
	Suplente	Francisco Justo Bautista Beteta

**TERCERO.** Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo indicado por los artículos 15 párrafo 2, y 34, fracción XII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para ese fin expídase por duplicado este acuerdo. Así mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

**NOTIFÍQUESE** este acuerdo, por oficio, al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, para los efectos legales pertinentes.

Así lo resolvieron por mayoría de cinco votos de los miembros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, siguientes: Licenciado Víctor Leonel Juan Martínez, Consejero Electoral; Maestro Juan Pablo Morales García, Consejero Electoral; Licenciada Alba Judith Jiménez Santiago, Consejera Electoral; Licenciado Víctor Manuel Jiménez Vilorio, Consejero Electoral, y Maestro Alberto Alonso Criollo, Consejero Presidente; con el voto en contra del Maestro David Adelfo López Velasco, Consejero Electoral, en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día trece de diciembre del dos mil trece, ante el Secretario General, quien da fe.

**POR ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL**

**CONSEJERO PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

**ALBERTO ALONSO CRIOLLO**

**FRANCISCO JAVIER OSORIO ROJAS**